

Escenarios políticos postelectorales en Cataluña



José Félix Tezanos
Director de *Temas*

La inquietud que se palpa en la calle –no solo en España– ante la evolución política en Cataluña revela que nos encontramos ante una cuestión de la mayor importancia y alcance práctico. Los resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 27 de septiembre solo han despejado dicha inquietud en un grado relativo.

Si nos atenemos a los efectos plausibles que van a tener los resultados electorales, es difícil hablar propiamente de un vencedor claro en dicha contienda política. Es harto posible que todos acabemos siendo un tanto perdedores a medio plazo. Sobre todo, si no existe la suficiente inteligencia política y la necesaria altura de miras para superar el clima de emocionalidad que se ha despertado, y reconducir la situación hacia escenarios postelectorales positivos y razonables. Y, sobre todo, asumibles por todos, sin generar mayores quebrantos en múltiples planos.

¿Hay un vencedor en las urnas?

Los votos del 27 de septiembre demuestran dos cosas importantes: la primera –ya sabida de antemano– es que el secesionismo catalán tiene una fuerza política notable que se encuentra muy movilizada –e incluso fanatizada–, aunque en ciertos aspectos demasiado enquistada en sí misma y, por lo tanto, con límites a un mayor crecimiento.

De hecho, en la última convocatoria de la Diada, si aceptamos como buenos los cálculos de sus convocantes, estaban presentes prácticamente todos los votantes de las candidaturas secesionistas (dos millones, respecto a 1.951.710 electores que han sumado las dos listas secesionistas el 27 de septiembre).

Por mucho que los cálculos rigurosos, basados en la planimetría de los espacios ocupados por los manifestantes de la Diada, surgieran cifras mucho menores (700.000 personas), lo cierto es que la

magnitud de los convocados es considerable. Como también lo ha sido el peso de *Junts pel Sí* en las urnas (un 39,76%). Si a esto le sumamos el 8,2% obtenido por la lista de Unidad Popular (CUP), tenemos un 48%, que no llega a la mayoría absoluta de los votos emitidos, y que supone solo el 35,5% del censo electoral. Porcentaje que es algo inferior al total de votos que los dos grandes partidos nacionalistas (CIU y ERC) obtuvieron en anteriores elecciones autonómicas.

El resultado de las elecciones implica un cierto contraste con las expectativas de voto generadas por algunas encuestas pre-electorales, que también en este caso no han sido capaces de estimar correctamente la potencialidad real de voto de algunos partidos, principalmente del PSOE, que pese a todos los problemas solo ha perdido 1,6 puntos respecto a los comicios anteriores. En cambio, el fiasco –y el fracaso de los pronósticos– ha sido mayor para el PP, al que el CIS auguraba 12-13 escaños, y que se ha quedado en 11, con una pérdida de 4,5 puntos. Lo mismo podemos decir de la lista impulsada por *Podemos*, a la que el CIS daba 18-19 escaños y que se ha quedado en 11 –casi la mitad– con un retroceso apreciable en los apoyos que, por sí solos, obtuvieron sus actuales coaligados en los últimos comicios catalanes.

En términos generales, el balance para Mas y los restos de *Convergència i Unió* no es nada positivo. En realidad, la coalición de fuerzas en la que participa Mas –que finalmente puede que no sea el Presidente de los secesionistas– no supone un avance en términos comparativos. De hecho, los votos obtenidos en su conjunto por *Convergència* y *Esquerra Republicana* –aún sin considerar otros movimientos sociales y fuerzas nacionalistas menores– han sido inferiores a los que obtenían durante la década de los años

ochenta, los noventa y principios de siglo, cuando *Convergencia*, en particular, era un partido que contaba con un liderazgo más responsable y con unas estrategias más sensatas y viables. Por ejemplo, en 1984 CIU y ERC sumaron un 51,2% de los votos emitidos (y 77 escaños), en 1992 un 54,2% de los votos (y 81 escaños), en 1995 llegaron a sumar más de un millón seiscientos mil votos (49,9%, con 73 escaños), y aún en 2012 alcanzaron más de un millón seiscientos mil votos (un 44,4%, con 71 escaños), ascendiendo a 1.730.818 votos y 74 escaños si sumamos a la CUP. El balance, pues, no puede ser más negativo.

Después del fiasco electoral, los secesionistas catalanes tienen que entender que con el retroceso en votos y escaños experimentado no tienen más opción que recoger velas y volver a una senda de sentido común y entendimiento.

La segunda evidencia es que, al otro lado –y nunca mejor dicho–, los partidos no secesionistas han obtenido más votos de lo que algunos esperaban –y estimaban–, demostrando la división que existe entre la opinión pública de Cataluña en torno al proyecto independentista; aún sin considerar la ambigüedad calculada de la lista apoyada por *Podemós*. Lo cual no es nada nuevo en un partido que dice que no es de izquierdas ni de derechas y, en esta ocasión, ni independentista ni unionista, ni lo contrario. De ahí, en parte, su fiasco electoral.

El espectacular avance de *Ciudadanos*, a su vez, anticipa la posibilidad de que este partido se convierta en un actor político destacado en la vida política española, recogiendo una parte importante del anterior voto más moderado y desengañado del PP.

Un aspecto central que debe ser tenido en cuenta en la valoración del resultado de las elecciones catalanas es la diversidad territorial del voto y la manera sesgada en la que se prima la representación de los territorios en los que tienen más fuerza las posiciones nacionalistas. Los resultados que se han dado en la circunscripción de Barcelona, por ejemplo, revelan que allí los enfoques secesionistas tienen menos

peso que en otros lugares, e incluso son minoritarios proporcionalmente. Lo cual significa que, de acuerdo a la manera de razonar de los secesionistas, y de su defensa apriorística del “derecho a decidir”, los ciudadanos de Barcelona también tendrían el derecho –en su caso– a no seguir las políticas independentistas auspiciadas por los líderes secesionistas, y plantear un *statu quo* territorial de relación con el resto de España diferente al de los territorios más proclives al secesionismo. Posibilidad (democrática) que, obviamente, acabaría conduciendo a un auténtico disparate y a un lío mayúsculo que nadie podría entender.

¿Existe legitimidad suficiente para una dinámica independentista?

Con más de la mitad de la opinión pública en desacuerdo y con un proceso que suscita tanta desconfianza y recelos –no solo en España–, es evidente que cualquier decisión independentista por parte de los que conforman la mayoría de escaños –pero no de votos– en las elecciones autonómicas –no olvidemos que esto es lo que han sido– está condenada no solo a la deslegitimación política inicial, sino al fracaso práctico.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que en aquellos lugares del mundo donde se ha dado una tensión secesionista extrema, todo el mundo tiene asumido que la mitad de los ciudadanos residentes en un territorio no pueden adoptar, por sí solos, una decisión tan importante y de tanto alcance y consecuencias prácticas (en este caso bastante negativas) como separarse de otro país que lleva existiendo cientos de años. Es decir, una mitad nunca puede decidir también por la otra mitad, ni obligar a dicha mitad a tener que padecer las consecuencias prácticas negativas de una decisión que no comparte ni asume. Y, menos aún, si los secesionistas no son ni la mitad, como en este caso. E, incluso, si no llegan ni siquiera a superar el 36% del censo.

Por eso, en los procesos secesionistas que han tenido lugar –o que están previstos constitucionalmente– en países democráticos serios se requieren mayorías muy cualificadas, no solo entre los que apoyan la decisión en las urnas, sino también en lo que concierne a los porcentajes de participación requeridos. Eso y no otra cosa es un proceso verdaderamente democrático.



Cuando a todo lo anterior se une que la eventual decisión sobre un proceso secesionista ni siquiera está prevista en la Constitución, ni tiene encaje en el marco supranacional del que se forma parte (en este caso la Unión Europea y, más en particular, la zona euro), y además ni siquiera ha sido objeto de cierto consenso o negociación previa, entonces resulta palmariamente evidente que no existe legitimación alguna para una aventura independentista. Ni *de facto*, ni *de iure*, ni en función de unos apoyos sociológico-electorales inequívocos.

Por lo tanto, la euforia de los independentistas ni está justificada, ni dispone legítimamente de margen alguno de actuación que no implique lanzarse al vacío.

Los costes económicos y políticos del descrédito

El problema de fondo es que los secesionistas catalanes están metiendo a Cataluña, y por ende a toda España –y en parte a la zona euro–, en un callejón de desprestigio y deterioro por todo el mundo.

Hasta ahora, la actuación de los líderes de la secesión no ha podido ser más errática, irregular y poco seria. Primero, y sobre todo, intentando llevar a Cataluña –y a todos los catalanes– por un camino sin salida, ni posibilidades. Segundo, realizando una penosa labor de Gobierno, plagada de corruptelas y sinsentidos, obsesionados por conducir a la opinión pública por la senda de la bipolarización y la confrontación abierta. Tercero, manteniendo una posición arrogante y soberbia, negándose a dialogar y a intentar consensuar nada, no solo con aquellos que se han venido negando también a dialogar (Mariano Rajoy y el PP), sino también –y esto es muy importante– con los partidos y líderes políticos más abiertos al diálogo y a los posibles acuerdos de carácter federalista, como Pedro Sánchez, en particular, y el PSOE, en

general. Y, en cuarto lugar, enredándose en una secuencia de actuaciones un tanto insólitas, e incluso pintorescas, como emitir extraños comunicados internacionales –que casi nadie puede entender ni compartir–, convocar pseudo-referéndums unilaterales, con preguntas sumamente confusas y enrevesadas, realizando elecciones autonómicas que ellos mismos califican –unilateralmente– como plebiscitarias, no evaluando las consecuencias económicas prácticas de la independencia que postulan, ni informando a la opinión pública sobre los condicionantes existentes, etc. ¿Alguien está calculando el desprestigio internacional al que está llevando tal modo de actuar? Desprestigio no solo para Cataluña, sino también para España en su conjunto. Y, desde luego, no inmerecido.

¿Qué precio vamos a tener que pagar todos por estas maneras insólitas de proceder? ¿Qué efectos va a tener el descrédito internacional que nos está cayendo encima como país poco serio?

Escenarios postelectorales

Los escenarios postelectorales que pueden considerarse a corto plazo, lógicamente, van a estar especialmente afectados por los diversos antecedentes de la situación. Un primer escenario –ojalá– es que los secesionistas extremos comprendan que no han tenido los apoyos aplastantes en las urnas que ellos esperaban y que unos resultados tan magros –sociológicamente– obligan a recoger velas y reorientar sus estrategias hacia ámbitos de entendimiento y recuperación de la credibilidad perdida. Sobre todo, la credibilidad económica e institucional.

El espectacular avance de Ciudadanos anticipa la posibilidad de que este partido recoja una parte importante del voto más moderado y desengañado del PP.

En el momento de formar gobierno, Mas y los restos de CIU deberán verificar si están siendo traicionados por algunos de sus compañeros de candidatura –y negados por sus eventuales socios de gobierno– y si lo mejor que pueden hacer por

Cataluña ahora es bajar la cabeza y aceptar el diseño sucesorio alternativo en el liderazgo que se ha perpetrado a sus espaldas, o más bien volver a recomponer las fuerzas de *Convergencia*, intentando establecer acuerdos y bases sólidas de entendimiento que faciliten futuros diálogos y eventuales acuerdos con partidos políticos sensatos.

Desde luego, este sería uno de los mejores escenarios políticos para la recomposición de la situación en Cataluña y para intentar evitar los riesgos de una catástrofe económica de considerable entidad. Pero, habrá que ver si Mas y otros líderes históricos de *Convergencia* son capaces de sustraerse no solo al vértigo del proceso en el que se han metido, sino a las incertidumbres y miedos que les suscitan los procesos judiciales abiertos por corrupciones de cierta entidad. Algo que, comprensiblemente, les atenaza y les aterroriza.

La caída del PP en Cataluña y el retroceso de la lista auspiciada por Podemos, en contraste con algunos pronósticos demoscópicos, revelan que los electores rechazan la bipolarización y las posiciones extremas.

Un segundo escenario es el de una inercia secesionista pastosa, ambigua, lenta y basada en un continuo tantear, presionar y simular, acompañada de la máxima emocionalidad posible. Esto supondría intentar avanzar poco a poco en un "proceso" tan confuso y ambivalente como sea posible, ideado para intentar evitar "reacciones desde Madrid" ante causas y conductas concretas suficientemente delimitadas, incluso en términos legales (constitucionales y penales). Ni que decir que si se entra en ese juego de ambigüedades, simulaciones y confusas proclamaciones indirectas –sin escuchar la voz de las urnas– se causaría un auténtico estupor en los ambientes internacionales, produciendo efectos bastante negativos en nuestra credibilidad económica y política. ¿Qué se pensaría realmente de nosotros como país?

Un tercer escenario es el de la declaración unilateral y más o menos rápida de una independencia impulsada por el fervor de las masas y por un entu-

siasmo suscitado por lecturas sesgadas del resultado de las urnas. Lo cual iría acompañado, quizás, por actos de provocación calculados y pensados para dar paso a una "reacción de Madrid" –atentos a lo que ya están diciendo los de la CUP–, que sería respondida por una campaña progresiva de "resistencia y movilización ciudadana", basada en otras experiencias de "resistencia activa", sistematizadas en algunos manuales prácticos que se están difundiendo en los círculos secesionistas catalanes más extremistas. Se trataría, en definitiva, de alentar un escenario de bipolarización, en el que las masas serían confrontadas con un gobierno de Madrid abiertamente intervencionista, al que se intentaría desgastar poco a poco y de manera sistemática, aumentando las contradicciones, las resistencias y los conflictos, hasta que no le quedara más remedio que acabar abandonando Cataluña, como hizo en su día el Gobierno británico en la India –argumentan algunos–. De esta manera piensan que lograrían que, al final, el éxito del propósito independentista resultase más concluyente y definitivo.

Obviamente, existe también –aún sin agotar las posibilidades– un quinto escenario constructivo que se basaría en una amplia coalición de fuerzas políticas sensatas, con fuertes apoyos de los sectores sociales, culturales, económicos y comunicacionales de Cataluña y de España, cuya finalidad primordial sería cambiar de enfoque y establecer las bases para un diálogo realista y constructivo, que pudiera facilitar un nuevo consenso constitucional, capaz de satisfacer razonablemente a todas las partes, posibilitando la estabilidad interna, la recuperación de la credibilidad perdida y de la fiabilidad económica necesaria en el mundo moderno. Con este proceder se demostraría a Europa y al mundo que ni Cataluña ni España quieren un Kosovo, ni un Estado fallido y en crisis económica sistémica dentro del territorio del euro, con todos sus efectos corrosivos. Ni que decir tiene que este es el escenario que permitiría a muchos respirar tranquilos, alejándonos de los climas de emocionalidad y de los órdenes estratégicos sistemáticos, que siempre tienen resultados inciertos y peligrosos.

La pregunta clave, ante este panorama, es qué se puede hacer en estos momentos para lograr que prevalezcan los escenarios más positivos y racionales. **TEMAS**